

Movilizaciones contra el MECD

Fernando Lezcano
Secretario General FECC.OO.

Cuando llegue a vuestras manos este ejemplar de TE, se estará a punto de cruzar el puente que une la Ley de Universidades del PP y su tan traída y llevada Ley de Calidad de la Educación y ese puente es el que han construido las movilizaciones de la comunidad universitaria desde el pasado mes de noviembre.

En efecto, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ha concitado el rechazo más multitudinario que se ha dado nunca en la historia de nuestras universidades, como lo demuestran las huelgas del 7 y del 14 de noviembre, y aunque al escribir estas líneas no se ha celebrado la Marcha sobre Madrid, prevista para el 1 de diciembre, todo hace pensar que ésta supondrá un salto cuantitativo y cualitativo en las movilizaciones.

El rechazo a la mencionada Ley va de lo más particular a lo más general y afecta tanto al fondo como a la forma. Es decir, desde las propuestas más concretas respecto a los órganos de gobierno, la política de profesorado, la ausencia de financiación, la marginación del Personal de Administración y Servicios (PAS) y de los estudiantes..., hasta el modelo de universidad selectiva, elitista, privatizada y controlada desde el poder político previsto en la Ley. Se ha luchado contra estos contenidos, pero también contra los “usos y maneras” empleados por el equipo ministerial y respaldados por el Gobierno, y que no son más que una muestra del autoritarismo con el que vienen ejerciendo la mayoría absoluta de la que disfruta el Partido Popular en el Parlamento. En una palabra, el Ejecutivo de Aznar está convencido de que esa mayoría parlamentaria le legitima para hacer lo que le venga en gana, confundiendo lo que en democracia es gobernar con lo que realmente le “pide el cuerpo”, que es dictar.

Pero la coincidencia de las movilizaciones universitarias con la difusión por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) de las líneas maestras de la futura Ley de Calidad, ha supuesto que el movimiento de protesta contra de LOU revele claramente cuánto hay de común en ambas normas.

Y es que no podía ser de otra manera. Si la Ley de Universidades no ha contado con el tiempo suficiente ni con los mecanismos necesarios para suscitar un debate riguroso y sereno, la Ley de Calidad se está elaborando con más secretismo todavía, hasta el punto de que mientras se habla mucho de ella, no se conoce ni un simple borrador.

La analogía entre ambas leyes no sólo estriba en la forma sino también en el fondo. Así, cuando, por un lado, se suprime la selectividad en la LOU y, por otro, se habla de instaurar una e incluso dos reválidas en la Ley de Calidad; cuando se plantea en la Ley de Universidades la creación de unos órganos de gobierno con más control político y en la Ley de Calidad se prevé que los directores de los centros sean designados por la Administración una vez que el claustro presente una terna; cuando se prevén medidas de evaluación de las universidades que promoverán la competencia entre ellas, estableciendo además un ranking que a su vez permitirá distribuir los fondos públicos, favoreciendo a las que ocupen los primeros puestos y en la Ley de Calidad se contemplan medidas similares; cuando observamos en la LOU las facilidades que se dan a las universidades privadas, y particularmente a las promovidas por la iglesia católica, y vemos cómo en el sistema anterior

a la universidad los centros privados son mayoritariamente católicos; o cuando se concluye que ninguna de ambas leyes orgánicas va acompañada de una ley o plan de financiación.

Las movilizaciones contra la Ley Orgánica de Universidades son el puente de la contestación a la Ley de Calidad de la Educación

Todo ello nos lleva a afirmar que el propósito del Partido Popular, más que salir al paso de los problemas que padece el sistema educativo, se reduce a imponer un particular modelo educativo, el de la derecha, selectivo y privatizador.

Por todas estas razones, las movilizaciones contra la LOU son el puente de la contestación a la Ley de Calidad.

Lo más lamentable es que no debería ser así.

Nuestro sistema educativo, tanto en la enseñanza superior como en la no universitaria, tiene problemas y en algunos casos, como en la Educación Secundaria Obligatoria, muy serios. Estos problemas requieren de medidas que recorran todos los niveles educativos y que atiendan especialmente a la situación del profesorado. Para resolverlos, y alcanzar mayores cotas de calidad educativa, se precisan diagnósticos rigurosos, que sean analizados con el tiempo suficiente, una firme voluntad de construir desde el consenso las mejores propuestas y una clara decisión política para financiar adecuadamente las medidas que finalmente se arbitren.

Pero, insistimos, no parece que ésta sea la voluntad del Gobierno. Por el contrario, está más preocupado por ganar las próximas elecciones generales y pasar a la historia como el que impuso el modelo educativo de la derecha política y social que por resolver eficazmente los problemas que sufre nuestro sistema. Ante este panorama, y aun manteniendo nuestra disposición al diálogo, tendremos que seguir llamando a la movilización.